



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE 19.649/2020

“GUARDIAN SRL c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

GUARDIAN SRL. apela la resolución N°2858/2019 (Di CRSS) que rechaza el recurso de revisión interpuesto, contra la resolución N.º 34/19(DV RSAL) que desestima la impugnación deducida respecto de la deuda determinada por Recursos de la Seguridad Social, específicamente en cuanto a la aplicación del Decreto 814/2001.periodo 5/2014 a 2/2018.

El recurrente no efectúa el depósito previo de la suma cuestionada (art. 15 ley 18820). Alega imposibilidad de cumplimiento presenta estados contables. Se adjunta en su reemplazo póliza de seguros de caución emitida por Aseguradores de Cauciones S.A. por un monto de \$ 40.368.447,61.

Como ya se ha dicho reiteradamente se considerado el seguro de caución como un sucedáneo valido del depósito previo, (conf. criterio Alto Tribunal “ Orígenes AFJP S.A. C/ Administración Federal de Ingresos Públicos, sent del 04/11/2008). En consecuencia, se habilita la instancia y se analiza el recurso impetrado.

En su memorial recursivo, el apelante plantea la nulidad del acto determinativo , alega vicios de procedimiento al denegarse la prueba ofrecida, sostiene que el cálculo de las contribuciones patronales a su cargo es el correspondiente a la alícuota reducida aplicable a las empresas que encuentran dentro de los parámetros de una PyME conforme lo disponen las resoluciones dictadas por su autoridad de aplicación de acuerdo a sus ventas totales anuales y no resulta encuadrable en lo establecido en el artículo 2 inc. a del Decreto 814/2001.Sostiene que los valores de ventas totales anuales para ser considerada PyME fueron actualizándose por la autoridad de aplicación durante sucesivos años , en función de las siguientes resoluciones modificatorias Resoluciones 24/01,657/02,303/04,147/06, 21/10, 50/13,357/15 ,11/16,130/17 y 340/17,154/18 y 215/18, 519/18 y 220/19.Cuestiona la sanción impuesta, refiere un exceso

Fecha de firma: 14/11/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#35158042#348966071#20221110101309333



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

reglamentario del art. 14 de la RG(AFIP) n° 1566/2003. Cita jurisprudencia en apoyo de su pretensión.

La AFIP, por su parte sostiene que no existe un concepto único de PyME que defina a dichas unidades productivas, sino que hay que considerar a cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME adoptada por el PEN en el Decreto N° 1009/01 para la aplicación del Decreto N° 814/01. Afirma que en cuanto a la remisión efectuada por el Decreto N° 1009/01 a la Resolución SPyME N° 24/2001, la única finalidad de esa remisión es la de definir la actividad principal del empleador y la forma de cálculo de sus ventas, pero el concepto de PyME a los efectos de la determinación de la alícuota de contribuciones patronales es el que surge de dicho decreto, ya que ese aspecto no ha sido remitido el límite de \$48.000.000 es la definición de PyME adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto N° 1009/01 a los efectos de la aplicación de su similar N° 814/01 y, en virtud de ello, todo empleador encuadrado en los sectores "servicios" o "comercio" cuya ventas totales anuales superen los \$ 48.000.000 debe tributar conforme a la alícuota del 21%. el Decreto N° 1009/01-artículo 1- reglamenta las condiciones de aplicación del Decreto N° 814/01 -artículo 2-, las que no pueden ser modificadas sino por las disposiciones de una norma que ostente al menos, la misma jerarquía; por ende, el tope de \$48.000.000 fijado por el artículo 1 del Decreto N° 1009/01 podría ser modificado por el PEN mediante la emisión de un nuevo Decreto, pero se mantiene inalterable ante el dictado de normas de jerarquía inferior, como son las dictadas por la SPyME. salvo en lo que es materia de remisión expresa -que en relación al monto de \$48.000.000 no acontece-, el Decreto N° 1009/01 no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas a la Resolución SPyME N° 24/01 por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06, manteniéndose incólume el importe allí establecido hasta tanto sea modificado por el PEN. Ratifica la sanción impuesta, y la regularidad del procedimiento administrativo incoado.

El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

Fecha de firma: 14/11/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#35158042#348966071#20221110101309333



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala a los efectos los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

En tanto el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES en la actividad comercial. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002, 147/2006; 21/2010; 50/2013, 357/2015 , 11/2016, 103/2017,340 E/2017y mod, que correspondan al periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b.

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformada por la ley 27430. Asimismo, la Ley 27541 vigente desde el 23 de diciembre de 2019 introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

Ello así el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo de cargo. Revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

En razón de lo dicho, es abstracto pronunciarse sobre el resto de los agravios.

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al organismo, conforme art. 68CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del CPCCN cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas, 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018) se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 230 UMA, equivalente a \$2.392.000 (valor UMA 10.400 conf. Acordada 25/2022).

Por lo señalado propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 230 UMA, equivalente a \$2.392.000 (conf. Ac. 25/2021). Importe al que se adicionara el IVA en caso de corresponder.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

En autos la empresa GUARDIAN SRL cuestiona la Resolución Administrativa 2859/2019 del 12/08/2019 en cuanto reclama el pago de diferencias por lo que considera una errónea aplicación de la alícuota prevista en el inciso b. del artículo 2º del Decreto 814/2001 en lugar de aplicar el inciso a) de la mencionada norma, atento las ganancias obtenidas que, según sostiene el organismo fiscal, habrían superado el límite de ventas previsto por el decreto 1009/01 durante los periodos 05/2014 a 02/2018. El reclamo efectuado es por \$ 13.178.667,69 en concepto de capital, \$ 17.119.783,62 por intereses y una multa de \$ 10.069.996,30 con base en lo previsto por la ley 17.250 reglamentada por la RG 1566 (t.o.2010, artículo 14 inciso H).

Coincido con el vocal preopinante en cuanto a la conveniencia de proceder a la apertura de la presente instancia, dado que se ha acompañado en autos, en formato PDF, un seguro de caución emitido por la empresa Confidents Garantías Judiciales, póliza N.º 1.146.431 por un total de \$ 40.368.447,61, dando cumplimiento de esta forma a lo dispuesto por el Superior Tribunal de la Nación al expedirse en la causa “Orígenes AFJP SA c/AFIP” sentencia del 04/11/2008. No obstante, he de disentir en cuanto al fondo de la cuestión sometida a juzgamiento.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Ahora bien, la actividad principal de la actora es la provisión de servicios de seguridad e investigación en diferentes lugares del país, teniendo dentro de su objeto social como ocupaciones complementarias el servicio de limpieza de edificios y alquiler de vehículos automotores.

Entre los agravios vertidos GUARDIAN SRL expresa que organismo actuante vulneró la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio estatuida en el artículo 18 de la Constitución Nacional al no otorgarle una razonable oportunidad de ejercitarlo. Sostiene que la resolución que impugna esgrime postulados dogmáticos por los cuales no produce la prueba ofrecida, en muestra de absoluta arbitrariedad, cuando es conducente a los fines de lo que se pretende dilucidar por lo tanto la resolución en recurso no responde a las previsiones del artículo 7° de la ley 19.549, encontrándose viciada en este aspecto. Explica que de los estados contables acompañados, que cuentan con firma certificada, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/17 y al 31/12/18 surge a las claras que sus ingresos son inferiores a los montos establecidos por la SEPyME como límite para ser calificado como pequeña empresa. Insiste en que existen sobradas razones para interpretar la legislación de la manera en que lo hizo, pues afirma que el decreto 814/01 es una norma modificada o complementada por otras normas y que su parte liquidó las contribuciones patronales según pautas cuantitativas de facturación anual establecidas por las diversas resoluciones que sucedieron a la original Resolución N° 24/01 (SEPyME) actualizándola, así como las resoluciones 675/2002, 303/2004, 147/2006, 21/2010, 50/2013, 357/2015, 11/2016, 130/2017 y 340/2017, 154/2018, 215/2018, 519/2018, 220/2019, que corresponden al periodo del cargo y consecuentemente la subsunción de su situación en las mismas a efecto de quedar comprendida en el beneficio de reducción de contribuciones patronales conforme lo prevé el decreto 814/2001 artículo 2° inciso b. Por lo anterior solicita se deje sin efecto la determinación de deuda aplicada dado que los montos que surgen de su documentación contable quedan comprendidos dentro de las cifras contenidas en las distintas resoluciones que actualizan la original Resolución 24/01 SEPyME.

Sobre el tema ya he fijado mi posición como vocal preopinante al expedirme en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que, para cada actividad, fije un organismo administrativo -Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada).

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y/o prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con la apelante.

Como ya expresara, la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que los decretos 814/01 y 1009/01 así como el artículo 173 de la ley 27430 fueron derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales” estableció un nuevo régimen de alícuotas. Esta modificación si bien no alcanza al periodo reclamado (mayo de 2014 a febrero de 2018) deberá tenerse en cuenta para periodos posteriores.

Por último y con relación a los honorarios, atento la calidad, extensión, complejidad de los trabajos realizados y la facultad que otorga al magistrado el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15UMA (\$ 156.000) y 10 UMA (\$104.000) respectivamente, CSJN. Ac. 25/2022.

En definitiva, propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, rechazar el planteo de prescripción interpuesto, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 15 UMA (\$ 156.000) y 10 UMA (\$ 104.000) en favor de la representación letrada de la parte actora (CSJN. Ac.25/2022).

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto del Doctor Carnota.

Por lo expuesto, el Tribunal por mayoría **RESUELVE:** 1º) Habilitar la presente instancia judicial, 2º) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado, 3º) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN), 4º) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 230 UMA, equivalente a \$2.392.000 de conformidad con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de su acordada 25/2021. A dicho importe se le adicionará IVA en caso se corresponder. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Fecha de firma: 14/11/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#35158042#348966071#20221110101309333